



**Rama Judicial del Poder Público**  
**Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Atlántico**  
**JUZGADO CATORCE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA**

**INFORME SECRETARIAL**

Barranquilla, 01/12/2.020.

<b>Radicado</b>	<b>08001-33-33-014-2020-00211-00</b>
<b>Medio de control o Acción</b>	<b>Tutela</b>
<b>Demandante</b>	<b>CARLOS ARTURO DIAZ ESTRADA</b> <b>Agente Oficioso: TULIA CAROLINA ESTRADA LOPEZ</b>
<b>Demandado</b>	<b>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – COORDINACIÓN</b> <b>GRUPO PRESTACIONES SOCIALES, FUERZAS MILITARES</b> <b>DIRECCIÓN DE SANIDAD</b>
<b>Juez (a)</b>	<b>Guillermo Osorio Afanador</b>

<b>INFORME</b>
Señor juez, el día 27 de noviembre de 2020, se recibe de la oficina Judicial, la demanda de tutela de la referencia. Contiene solicitud de medida provisional. Demanda remitida en formato word y anexos en formato PDF.

<b>PASA AL DESPACHO</b>
Para analizar admisión de demanda de tutela con medida cautelar

<b>CONSTANCIA</b>
Demanda remitida y anexos en formato PDF

**ALBERTO LUIS OYAGA LARIOS**  
**SECRETARIO**

<b>Ultimo Folio Digitalizado y número de cuaderno</b>	<b>Firma de Revisado</b>



**Rama Judicial del Poder Público**  
**Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Atlántico**  
**JUZGADO CATORCE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA**

Barranquilla, primero (1º) de diciembre de dos mil veinte (2.020).

<b>Radicado</b>	<b>08001-33-33-014-2020-00211-00</b>
<b>Medio de control o Acción</b>	<b>Tutela</b>
<b>Demandante</b>	<b>CARLOS ARTURO DIAZ ESTRADA</b>
<b>Agente oficiosa</b>	<b>TULIA CAROLINA ESTRADA LOPEZ</b>
<b>Demandado</b>	<b>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – COORDINACIÓN GRUPO PRESTACIONES SOCIALES - FUERZAS MILITARES DIRECCIÓN DE SANIDAD</b>
<b>Juez (a)</b>	<b>Guillermo Osorio Afanador</b>

**CONSIDERACIONES**

Conforme con el informe secretarial que antecede, en efecto se observa demanda que en ejercicio de la acción de tutela presenta la señora Tulia Carolina Estrada López, en su calidad de madre de Carlos Arturo Díaz Estrada, y de quien afirma padece trastornos esquizofrénico, contra el Ministerio de Defensa Nacional - Coordinación Grupo Prestaciones Sociales y la Dirección de Sanidad, solicitando el amparo a los derechos fundamentales a la salud y a la vida.

Previo a decidir lo que corresponda sobre la admisión de la acción de tutela, advierte el Despacho que en el presente caso se solicita una medida provisional con el fin de proteger los derechos fundamentales del accionante, de conformidad con los artículos 7 del Decreto 2591 de 1991 y 230 de la Ley 1437 de 2011.

Ahora bien, respecto a la medida provisional solicitada por la accionante, el despacho considera que la acción de tutela, prevista por el artículo 86 de la Constitución Política, faculta a toda persona para reclamar ante los jueces, mediante un procedimiento preferente y sumario, la protección inmediata de los derechos fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública, o de los particulares, en los casos en que así se autoriza.

El Decreto 2591 de 1991, reglamentario de la acción de tutela, establece que el juez constitucional cuando lo considere necesario y urgente para proteger el derecho “suspenderá la aplicación del acto concreto que lo amenace o vulnere” y dicha suspensión puede ser ordenada de oficio o a petición de parte. En efecto, el artículo 7, dispone:

*“Artículo 7o. Medidas provisionales para proteger un derecho. Desde la presentación de la solicitud, cuando el juez expresamente lo considere necesario y urgente para proteger el derecho, suspenderá la aplicación del acto concreto que lo amenace o vulnere. Sin embargo, a petición de parte o de oficio, se podrá disponer la ejecución o la continuidad de la ejecución, para evitar perjuicios ciertos e inminentes al interés público. En todo caso el juez podrá ordenar lo que considere procedente para proteger los derechos y no hacer ilusorio el efecto de un eventual fallo a favor del solicitante. La suspensión de la aplicación se notificará inmediatamente a aquél contra quien se hubiere hecho la solicitud por el medio más expedito posible. El juez también podrá, de oficio o a petición de parte, dictar cualquier medida de conservación o seguridad encaminada a proteger el derecho o*



**Rama Judicial del Poder Público**  
**Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Atlántico**  
**JUZGADO CATORCE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA**

*a evitar que se produzcan otros daños como consecuencia de los hechos realizados, todo de conformidad con las circunstancias del caso”*

En este sentido, la Corte Constitucional ha señalado que las medidas provisionales pueden ser adoptadas en los siguientes casos: *“(i) cuando resultan necesarias para evitar que la amenaza contra el derecho fundamental se convierta en una violación o; (ii) cuando habiéndose constatado la existencia de una violación, estas sean necesarias para precaver que la violación se torne más gravosa”* 1. (Autos A-040A de 2001 (MP: Eduardo Montealegre Lynett), A-049 de 1995 (MP: Carlos Gaviria Díaz), A-041A de 1995 (MP: Alejandro Martínez Caballero) y A-031 de 1995 (MP: Carlos Gaviria Díaz).

Dice además la Corte que las medidas cautelares pueden ser adoptadas durante el trámite del proceso o en la sentencia, pues *“únicamente durante el trámite o al momento de dictar la sentencia, se puede apreciar la urgencia y necesidad de la medida”*. (Auto 035 de 2007.)

En cuanto a la procedencia de la medida de suspensión provisional la Corte Constitucional ha expresado:

*“La medida de suspensión provisional de actos concretos debe ser razonada y no arbitraria, producto de una valoración sensata y proporcional a la presunta violación o amenaza de los derechos fundamentales alegados. Así entonces, el Decreto 2591 de 1991, efectivamente permite suspender provisionalmente la aplicación de actos concretos que amenacen o vulneren un derecho fundamental, pero solamente cuando sea necesario y urgente para la protección del derecho, lo cual exige, por parte del juez de tutela, un estudio razonado y conveniente de los hechos que lleven a la aplicación de la medida”*<sup>[4].</sup><sup>1</sup>

De igual forma, para proceder a decretar una medida, la Corte Constitucional ha sido enfática en señalar que toda medida provisional debe cumplir con dos principios *fumus boni iuris*, y el *periculum in mora*, como lo estableció en la sentencia SU-913 del 2.009, diciendo:

*“(…) En tanto se analizaron dos de los más importantes principios que rigen la práctica de medidas cautelares, para efecto de garantizar un justo término de equidad en el proceso. Estos son: el periculum in mora y el fumus boni iuris, los cuales deben aparecer de forma concurrente para asegurar la proporcionalidad y congruencia de la medida. El primero, periculum in mora, tiene que ver con el riesgo de que al no adoptarse la medida cautelar sobrevenga un perjuicio o daño mayor del que se expone en la demanda, que de no precaverse, transforme en tardío el fallo definitivo. Tiene igualmente que ver con un temor fundado de que el derecho se frustre o sufra menoscabo durante la sustanciación del proceso. El segundo, fumus boni iuris, aduce a un principio de veracidad en cuanto a la afectación del derecho invocado como fundamento de la pretensión principal. Estos dos principios, asegura la doctrina, deben operar de manera concurrente, al punto que la falta de uno de estos elementos, debe dar lugar a que: i. se rechace la medida cautelar o ii. Se otorgue la medida pero de manera limitada. Por ejemplo, si el valor de la causa en juicio ejecutivo es proporcionalmente mínimo a la solvencia del demandado, la medida carecerá de periculum in mora, caso en el cual no habrá necesidad de hacer juicio alguno sobre el principio fumus boni iuris, pues de plano resulta innecesaria la medida”*

---

<sup>1</sup> T-733 de 2013

**Rama Judicial del Poder Público**  
**Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Atlántico**  
**JUZGADO CATORCE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA**

Más recientemente, la Sala Plena de la Corte Constitucional, reorganizó estos requisitos en solo tres<sup>2</sup>. Aunque simplifica el análisis, también lo hace más estricto para el juez de tutela que pretenda aplicar el artículo 7º del Decreto 2591 de 1991. De acuerdo con esta reformulación, la procedencia de la adopción de medidas provisionales está supeditada al cumplimiento de las siguientes exigencias:

*“ (i) Que la medida provisional, para proteger un derecho fundamental o evitar perjuicios ciertos e inminentes al interés público, tenga vocación aparente de viabilidad por estar respaldada en fundamentos fácticos y jurídicos razonables, es decir, que tenga la apariencia de un buen derecho (fumus boni iuris);*

*(ii) Que exista un riesgo probable de que la protección del derecho invocado o la salvaguarda del interés público pueda verse afectado considerablemente por el tiempo transcurrido durante el trámite de revisión, esto es, que haya un peligro en la demora (periculum in mora); y*

*(iii) Que la medida provisional no genere un daño desproporcionado a quien afecta directamente.”*

Dicho lo anterior, en el caso sub-judice, el despacho constata que la agente oficiosa solicita como medida provisional lo siguiente:

*“Señor Juez con el respeto que me caracteriza solicito a su honorable despacho decretar a favor del accionante MEDIDA PROVISIONAL consistente en que se le ordene al MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – COORDINACIÓN GRUPO PRESTACIONES SOCIALES, FUERZAS MILITARES DIRECCIÓN DE SANIDAD, preste la atención médica necesaria a mi hijo CARLOS ARTURO DIAZ ESTRADA, sobre en atención con médico psiquiatra, para garantizar el derecho a la salud.”*

En consonancia, esta agencia, encuentra preciso señalar al respecto, que la Corte Constitucional se ha referido a la configuración del perjuicio irremediable recientemente en sentencia T-020 de 2.018, con ponencia del Dr. José Fernando Reyes Cuartas, lo siguiente: *“De la configuración del perjuicio irremediable, se adujo que precisa verificarse: “(i) una afectación inminente del derecho -elemento temporal respecto al daño-; (ii) la urgencia de las medidas para remediar o prevenir la afectación; (iii) la gravedad del perjuicio -grado o impacto de la afectación del derecho-; y (iv) el carácter impostergable de las medidas para la efectiva protección de los derechos en riesgo[58].” Adicionalmente, se aclaró que: “...cuando la acción de tutela es promovida por personas que requieren especial protección constitucional, como (...) personas en condición de discapacidad, (...) entre otros, el examen de procedibilidad de la acción de tutela es menos estricto, a través de criterios de análisis más amplios, pero no menos riguroso”*

Con base en lo anterior, para este Despacho Judicial no es palpable la presencia de alguna de las hipótesis planteadas por la Corte Constitucional para la procedencia eventual de la medida provisional en la acción de tutela.

En corcondancia con la petición, es de advertir a la accionante que de las pruebas aportadas, por sí mismas, no acreditan circunstancias de protección constitucional especial, hasta este momento del trámite.

---

<sup>2</sup> Auto 312 del 2018 M.P. Luis Guillermo Guerrero

**Rama Judicial del Poder Público**  
**Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Atlántico**  
**JUZGADO CATORCE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA**

Además, de tan precisas anotaciones, esta agencia considera que, atendiendo la data de los documentos en que funda su aquejo constitucional, a prima facie, se logre ocasionar un perjuicio irremediable que requiera intervención inmediata por parte del Juez de tutela, como también, que cualquier consideración al respecto de la presente acción constitucional, resulte tardía, y no den espera al fallo que resuelva la situación jurídica planteada por la agente oficiosa, dado que corresponde al despacho inicialmente, recaudar los elementos fácticos y jurídicos que permitan establecer una solución al problema jurídico a plantearse en el presente asunto.-

En consecuencia, se abstendrá el despacho de decretar la medida provisional solicitada, en tanto que, resulta improcedente en esta etapa desvirtuar las actuaciones de la entidad accionada, ante la carencia de razones que así lo permitan, más cuando la acción cuestionada se convalida con un posible acto administrativo, que bajo la premisa de presunción de legalidad, no puede desvirtuarse por apreciaciones subjetivas o afirmaciones que necesitan ser controvertidas, valoradas y/o acreditadas por esta agencia judicial.

Ahora bien, decidido lo anterior, se advierte a las partes que el trámite de la presente acción de tutela se adelantará a través de los medios electrónicos y las decisiones se notificarán a las cuentas de correo electrónico que las partes informen a la Secretaría del Despacho.

Los informes, memoriales y recursos a los que tengan derecho las partes se presentarán a través del correo electrónico institucional del Despacho [adm14bqlla@cendoj.ramajudicial.gov.co](mailto:adm14bqlla@cendoj.ramajudicial.gov.co)

Las decisiones que se adopten durante el trámite tutelar se registrarán en el software de gestión judicial “Siglo XXI”, que podrá ser consultado en la página web de la Rama Judicial en el link <https://consultaprocesos.ramajudicial.gov.co/procesos/bienvenida>

Por último y al reunir los requisitos exigidos por el artículo 14 del Decreto 2591 de 1991 y de conformidad con lo establecido en el núm. 2º del artículo 1º del decreto 1382 de 2000 y decreto 1983 de 2017, se,

**RESUELVE:**

- 1. ABSTENERSE** de decretar la medida provisional solicitada por el accionante de conformidad a lo expuesto en la presente providencia.
- 2. ADMÍTASE** la demanda de tutela interpuesta por la señora **TULIA CAROLINA ESTRADA LOPEZ**, quien actúa como agente oficiosa de **CARLOS ARTURO DIAZ ESTRADA**, contra el **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – COORDINACIÓN GRUPO PRESTACIONES SOCIALES, FUERZAS MILITARES DIRECCIÓN DE SANIDAD**.
- 3. NOTIFÍQUESE** personalmente el contenido de este auto al representante legal de **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – COORDINACIÓN GRUPO PRESTACIONES SOCIALES**, y al director de la **Dirección de Sanidad de las Fuerzas Militares**, y/o quienes hagan sus veces, por el medio más expedito y eficaz.
- 4. COMUNÍQUESE** el contenido de este auto a la accionante, por el medio más expedito y eficaz.

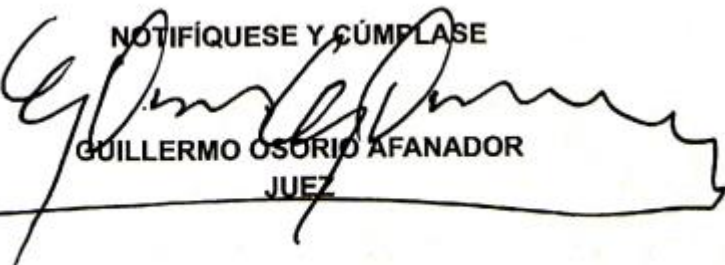


**Rama Judicial del Poder Público**  
**Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Atlántico**  
**JUZGADO CATORCE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA**

**5. INFÓRMESE** a la entidad y autoridades demandadas, que en el término de dos (2) días y por el medio más expedito pueden rendir informe sobre los hechos objeto de la presente acción, advirtiéndole que la información suministrada se considerará rendida bajo la gravedad del juramento y que la inobservancia a contestar acarrea las sanciones consagradas en los Arts. 19, 20 y 52 del Decreto 2591 de 1991.

**6.- TÉNGANSE** como pruebas, en lo que fuere conducente, los documentos aportados por la parte demandante en su escrito tutelar.

**7.- REITERESE** que las comunicaciones, memoriales, informes y recursos con ocasión de éste trámite, se recibirán en la cuenta de correo electrónico :  
[adm14bqlla@cendoj.ramajudicial.gov.co](mailto:adm14bqlla@cendoj.ramajudicial.gov.co)

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE  
  
GUILLERMO OSORIO AFANADOR  
JUEZ

NOTIFICACION POR ESTADO  
LA ANTERIOR PROVIDENCIA SE NOTIFICA POR ESTADO  
ELECTRONICO

Nº 135 DE HOY 02/12/2020 A LAS 8:00 A.M.



ALBERTO LUIS OYAGA LARIOS  
SECRETARIO

SE DEJA CONSTANCIA QUE SE LE DIO CUMPLIMIENTO AL  
ARTICULO 201 DEL CPACA